

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-021-2017-00584-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Beneficio del régimen de transición pensional - Límite temporal – Acto Legislativo 01 de 2005 – Reliquidación pensional e Incrementos pensionales
DECISIÓN	Confirma

*Medellín, seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, este asunto se tramita en audiencia de segunda instancia conforme al procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión

Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS** en contra de **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 022**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

### **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación que formuló el apoderado judicial del demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 8 de octubre de 2018.

### **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que nació el 6 de mayo de 1955, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 62 años; dice ser cotizante al entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 27 de septiembre de 1974, alcanzando a reunir más de 15 años de servicio al 1º de abril de 1994, por lo que se considera beneficiario del régimen de transición pensional.

Refirió que COLPENSIONES, mediante la Resolución SUB 82.094 del 30 de mayo de 2017 le reconoció la pensión de vejez sobre un IBL de \$1.698.234, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 79,35%, percibiendo una mesada pensional primigenia, por valor de \$1.347.549, con fecha de efectividad 1º de junio de 2017, contravirtiendo la norma conforme a la cual se reconoció dicho derecho, al estimar que debió pensionarse con fundamento en el Decreto 758 de 1990, como beneficiario del régimen de transición pensional.

Se duele que, Colpensiones, mediante reporte de semanas expedido, no certifica las cotizaciones del actor entre los años 1974 y marzo de 1980, con el empleador COLTEJER, para quien dice haber laborado, lo cual afecta su record de semanas en aproximadamente 308,52 semanas que no se le estarían teniendo en cuenta, considerándose perjudicado por la propia entidad, que no habría adelantado las acciones de cobro frente a los empleadores morosos. Agregó, que la entidad tampoco le está teniendo en cuenta las semanas cotizadas con el empleador IMPROQUIM LTDA, en el ciclo mayo de 2017, y, que dichos faltantes, lo privan de reunir un total de 2,126 semanas cotizadas en toda su vida laboral, que le permitirían acceder a un IBL promedio de los 10 últimos años, con una tasa de reemplazo del 90%.

De otro lado, indicó que, desde el 3 de noviembre de 1979, contrajo matrimonio católico con la señora MARIELA DEL SOCORRO PUERTA, con quien dijo convivir de manera ininterrumpida desde dicha fecha, existiendo absoluta dependencia económica.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial esta dirigida a que se declare que el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional, y que, en consecuencia, se condene a Colpensiones a reconocer y pagarle la reliquidación de la pensión de vejez bajo una tasa de reemplazo del 90% en aplicación del Decreto 758 de 1990, retroactivamente desde el cumplimiento de los 60 años, con los incrementos pensionales por persona a cargo, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas objeto de condena, lo que ultra y extra petita se halle probado, y las costas procesales.

### **IV. – RESPUESTAS A LA DEMANDA**

La demanda fue admitida mediante auto del 22 de agosto de 2017, disponiendo notificar a la entidad demandada.

COLPENSIONES contestó la demanda a través de escrito visible a folios 35 y siguientes del expediente, aceptando el status de pensionado del actor, su afiliación inicial al régimen pensional y el agotamiento de la reclamación administrativa; y, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, formulando las excepciones perentorias que denominó *“inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión del actor”, “inexistencia de la obligación de pagar incrementos pensionales”, “inexistencia de la obligación de pagar indexación”, “prescripción”, “buena fe” e “imposibilidad de condenar en costas a la entidad demandada”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 8 de octubre de 2018, el Juez de conocimiento, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones impetradas en su contra.

Los argumentos para llegar a dicha conclusión, partieron de destacar que: *i)* en el expediente no existe ninguna prueba de que el actor haya laborado al servicio de Coltejer SA entre los años 1974 a 1980, pero incluso de haber laborado dicho tiempo, no se probó que la supuesta mora por dicho interregno fuere oponible a Colpensiones, ya que la afiliación se dio desde el 11 de abril de 1980, y no desde 1974; *ii)* Con relación al ciclo mayo de 2017 con el empleador IMPROQUIM, supuestamente no tenido en cuenta en la historia laboral, lo calificó como intrascendente para efectos de determinar si el actor era o no beneficiario del régimen de transición; *iii)* concluyó que el actor al 1º de abril de 1994, alcanzó a reunir 631 semanas de cotización, y 39 años de edad, por lo que nunca fue beneficiario del régimen de transición pensional y, conforme a esta condición, y en gracia de discusión de considerar que pudo ser beneficiario de este beneficio; *iv)* al haber cumplido la edad de 60 años en el 2015, advirtió que el demandante, conforme a lo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, configuró requisitos pensionales por fuera de la vigencia de dicho régimen, lo que lo llevó a negar los incrementos pensionales por persona a cargo, al no tener bajo égida el Decreto 758 de 1990.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el apoderado judicial del demandante, reprochando íntegramente los argumentos del A quo, los cuales rebatió, reseñando: *i)* que en el plenario obra prueba idónea que acredita que el actor estaba afiliado a COLTEJER S.A. desde 1974; *ii)* atribuye al juicio jurídico absolutorio de instancia, la imposibilidad que tuvo de presentar los testigos, al no haberse realizado las dos audiencias que regula el Código Procesal Laboral, y haberse omitido decretar oficiosamente una prueba requiriendo a Coltejer para que allegara la información de los tiempos laborados por el actor desde el año 1974; *iii)* no encuentra justa la sentencia, teniendo en cuenta que desde la misma demanda se solicitó al juzgador la aplicación de las facultades ultra y extra petita; *iv)* no comparte la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y su limitante temporal al régimen de transición, y lo sustentó indicando que es una reforma política y no legal, que desconoce el derecho a la seguridad social, y; *v)* concluyó solicitando a este colegiado que revise la pensión reconocida al demandante, incluso bajo las normas del sistema general de pensiones, incluido el monto de la mesada pensional y el retroactivo pensional reclamado.

### **Alegatos de conclusión:**

En la oportunidad procesal, el Dr. Juan Pablo Sánchez Castro, con TP. 199.062 del CSJ., presentó alegatos de conclusión en representación de COLPENSIONES.

Esta Sala, conforme al poder especial otorgado por el representante legal de la firma PALACIO CONSULTORES SAS, le reconoce personería amplia y suficiente al citado profesional del derecho, para que lleve la representación judicial de la entidad en esta instancia, como apoderado judicial sustituto.

En los alegatos formulados, el togado llama la atención de esta Sala, para que se confirme íntegramente la sentencia de primera instancia, argumentando que, el señor HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS no cumple los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición pensional, y que la pensión que se le reconoció en primera instancia, se ajusta a derecho.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver de fondo, previas las siguientes

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.-** El régimen de transición pensional, su finalización conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 – Decreto 758 de 1990 – Reliquidación pensional e Incrementos pensionales por persona a cargo.

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por el apoderado judicial del demandante en el recurso de alzada, lo que comprende determinar si el señor HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS fue beneficiario del régimen de transición pensional, y en caso afirmativo, determinar si configuró requisitos pensionales antes de la finalización del régimen de transición, revisando la incidencia del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el punto, para concluir estableciendo si hay o no lugar a reliquidar la pensión de vejez del demandante por monto, bajo las reglas del Decreto 758 de 1990, y si le asiste derecho al reconocimiento de incrementos pensionales por cónyuge a cargo, bajo esa misma normativa.

No dejará la Sala de hacer referencia al retroactivo pensional reclamado por el actor en su demanda, cuando solicita en el acápite segundo de las pretensiones, que la pensión de vejez se reconozca desde el 6 de mayo de 2015, fecha en que el actor arribó a los 60 años de edad; aspecto sobre el cual el actor llama la atención en la alzada, y que fue punto omitido por el juez de primera instancia. Será menester de este colegiado, dar aplicación al inciso 2 del artículo 287 del Código General del Proceso<sup>1</sup>, al tratarse de una omisión judicial de la instancia, recurrida.

**Problema Jurídico Central: Las condiciones para ser beneficiario del Régimen de Transición pensional:**

El régimen de transición pensional es una figura jurídica creada por el legislador para proteger los intereses, derechos y beneficios de las personas que estaban próximas a pensionarse a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, buscando mantenerles las condiciones de su régimen inicial en algunos tópicos (edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto), frente a las exigencias uniformes que introdujo el Legislador al promulgar el sistema pensional contenido en la ley 100 de 1993.

Así lo dispuso el artículo 36 de la citada Ley, enfocando el beneficio normativo a los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigencia del SGP, que para el sector privado fue el 1° de abril de 1994, cumplieren una de las siguientes condiciones: Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad; hombres con cuarenta (40) o más años de edad, hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de servicios cotizados a esa fecha concreta, conforme lo señala el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, se debe tener en cuenta además, la reforma que al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, le introdujere el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1° párrafo transitorio número 4°, el cual estableció que

---

<sup>1</sup> Inciso 2° del artículo 287 CGP: *“El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria...”*.

dicho régimen, no podría extenderse más allá del 31 de Julio de 2010; excepto para aquellos trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, esto es, el 29 de Julio de 2005, a los cuales se les mantendrían dichas ventajas pensionales hasta el año 2014 (31 de Diciembre)<sup>2</sup>.

La tesis jurisprudencial que ha mantenido desde hace varios años la jurisdicción ordinaria, por la orientación que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dado al tema, a través de las sentencias Radicado 37.174 del 10 de agosto de 2010 y Radicado 51.035 del 27 de abril de 2016, entre otras, ha decantado que *“para efectos de recuperar la transición solo hay lugar a ella por razón del tiempo de servicios y no por la edad”*.

La consecuencia jurídica para el colectivo de ciudadanos que alcanzaban esta prerrogativa, se traduce en que *“podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha”*.

Es importante precisar que los regímenes de transición pensional, se erigen en mecanismos de protección frente a la potestad configurativa del legislador en el marco de los cambios en los requisitos para acceder a la pensión. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL16786 de 2017, reiterada en la SL2091 de 2019 Rad. 71.986, recordó:

*“... el fin primordial de todo régimen de transición es servir como un mecanismo de protección de los afiliados a un sistema pensional, con el propósito de evitar arbitrariedades en la configuración legislativa. Por lo tanto, si bien se puede en cualquier momento modificar el régimen legal que establece las condiciones para adquirir*

---

<sup>2</sup> En palabras de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL39797 del 24 de abril de 2012, reiterada en la SL12498 de 2017, Mp Clara Cecilia Dueñas Quevedo), *“Antes de la expedición del Acto Legislativo número 1 de 2005, la Ley 100 de 1993 buscó la unificación de los diversos regímenes existentes en materia de pensiones, tanto en el sector privado como en el público, y consagró un sistema universal que brindara la protección de la seguridad social en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas a toda la población, salvo las excepciones en ella señaladas”*.

*el derecho a la pensión, y aun, el régimen de transición que se haya establecido, no se podrá introducir abruptamente nuevas reglas sin considerar la situación de aquellos afiliados que están próximos a consolidar su derecho pensional; a menos que exista una justificación razonable y proporcionada acorde con los fines del estado social de derecho...”.*

Al mismo tiempo también, la alta corporación, ha decantado que *“el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de la transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido”,* en tanto, *“se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquel que ha entrado en el patrimonio de aquella”* (SL4650 de 2017). Así, *“sólo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación, porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que no corresponde al de derecho adquirido”* (SL2091 de 2019).

Tanto la Corte Constitucional<sup>3</sup>, como el órgano de cierre de esta jurisdicción (SL1347 de 2019), han dado aplicación a las condiciones establecidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, como norma superior, vigente, ajustada al ordenamiento jurídico y a la temporalidad de los regímenes de transición, e imposible de inaplicar. Para la Sala de Casación Laboral, *“aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos adquiridos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores”* SL1347 de 2019.

---

<sup>3</sup> La reforma constitucional introducida por el Congreso de la República a través del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció la exigencia de las 750 semanas cotizadas a su entrada en vigencia, para que los asegurados conservaren el beneficio de la transición hasta el 2014, ha sido abordada por la Corte Constitucional en varias oportunidades. En la Sentencia C-740/06, la Corte Constitucional dijo que no le era posible ejercer el control de constitucionalidad de un AL por su contenido material, por lo que se ha declarado inhibida para proferir fallo de mérito por ineptitud sustancial de la demanda al considerar que los ataques contra la disposición constitucional implican un análisis de tipo material y no formal, consideraciones similares a las que vertió en la S C-178/2007; resaltándose además que en SC-228 de 2011, se encontró que el citado acto legislativo ajustado a la Carta Política no evidenciaba vicio o irregularidad que atentara contra los principios constitucionales y los derechos adquiridos.

Habiendo precisado lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse en el **caso concreto** sobre este primer aspecto: No existe ninguna en cuanto a que: **i)** el señor HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS, al haber nacido el 6 de mayo de 1955<sup>4</sup>, contaba para el 1º de abril de 1994 con 39 años de edad, y según reporte de semanas obrante a folios 16 al 28 del expediente, que se repite a folio 54 del mismo, acreditaba a dicha fecha, un total de 631 semanas; **ii)** tampoco hay duda que el actor alcanzó su status de pensionado por vejez, a través de la Resolución SUB 82094 del 30 de mayo de 2017, a partir del 1º de junio de 2017, en cuantía inicial de \$1.347.549, resultante de haberle aplicado un IBL por valor de \$1.698.234, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 79,35%, y; **iii)** que, su condición de pensionado la adquirió, merced a la aplicación de la ley 797 de 2003.

Ahora, si bien la historia laboral del actor (fls. 54 y ss.), refleja una densidad total de 1,822 semanas cotizadas en toda su vida laboral, la activa se duele que, en dicho reporte, no se encuentran incluidas las semanas cotizadas por el actor al servicio del empleador COLTEJER S.A., por el lapso comprendido entre el 27 de septiembre de 1974 y el 10 de abril de 1980, ya que las historias laborales obrantes al plenario, solo reflejan las cotizaciones desde el 11 de abril de 1980.

Como respaldo probatorio a ese faltante de aproximadamente 300 semanas, de que se duele la activa, le estarían privando al actor de acceder a su derecho pensional bajo los presupuestos del régimen de transición pensional (Acuerdo 049 de 1990), se aportó un carnet del entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales, con número de afiliación 020606-378 (fl. 8), con fecha 27 de septiembre de 1974.

Al respecto, esta Sala estima pertinente confirmar la decisión de primer grado, al advertir que el actor no fue beneficiario del régimen de transición pensional, que le permitiese acceder a su derecho pensional con fundamento en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, básicamente por dos razones. La primera, es que, si bien se encuentra acreditada esa primera

---

<sup>4</sup> Copia de su cédula de ciudadanía, visible a folio 7 del expediente.

afiliación del demandante a la entidad, desde el 27 de septiembre de 1974, ello *per se*, no significa el mantenimiento de una relación laboral con COLTEJER desde dicha fecha hasta el año 1980; y, en segundo lugar, partiendo incluso de aceptar que ese tiempo fue laborado en COLTEJER S.A., y que habrían de sumarse a las 631 semanas acreditadas hasta el 1º de abril de 1994, las cerca de 300 semanas de dicho tiempo, alcanzándose a superar los 15 años de servicio o su equivalente en semanas cotizadas, el actor no alcanzó a configurar el requisito de la edad (60 años), antes de la finalización del régimen de transición pensional, el 31 de diciembre de 2014, ya que cumplió los 60 años de edad el 6 de mayo de 2015.

Tal como se reseñó en precedencia, no puede perderse de vista que el Acto Legislativo 01 de 2005 constituye una reforma a la propia carta política, por lo que su fuerza normativa y egida se extiende sobre toda la legislación nacional sobre la seguridad social. Dicho acto legislativo, elevó a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Sentencia CSJ SL4285-2018), garantizó los derechos adquiridos, y limitó razonablemente el régimen de transición pensional, el cual no podría entenderse como un derecho ilimitado en el tiempo, ya que su finalidad fue garantizar los derechos a normas anteriores a la Ley 100 de 1993, a determinado colectivo de ciudadanos colombianos que tenían ya consolidada ampliamente una expectativa legítima frente a las disposiciones que regularían su derecho pensional (Sentencia CSJ SL5110-2018).

Ahora, el apoderado judicial del actor, también argumenta en su recurso, que el juez de primera instancia desconoció las facultades *ultra y extra petita*<sup>5</sup> al

---

<sup>5</sup> El art. 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece:

*“ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas.”*

En efecto, esa facultad EXTRA PETITA que significa *“por fuera de lo pedido”*, requiere rigurosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar frontalmente los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio.

Y por su parte, la facultad ULTRA PETITA que significa *“más allá de lo solicitado”*, exige que la súplica impetrada en el escrito inicial, (i) sea inferior a la estatuida en la norma laboral, y que (ii) que no emerja del juicio que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor.

absolver a la entidad demandada, además de haberle cegado su derecho a presentar testigos para acreditar no solo la dependencia económica de la cónyuge del demandante a efectos de lograr el reconocimiento de los incrementos pensionales, sino también, para probar que el actor sí laboró al servicio de COLTEJER S.A.

Esta Sala no encuentra que el juez haya desconocido esa facultad, ya que, con las argumentaciones dadas en precedencia, es evidente que, incluso teniendo por laborado por el actor al servicio de FABRICATO S.A., sus requisitos pensionales se consolidaron por fuera de la extensión temporal del régimen de transición pensional, siendo indiscutible que, al no tener al actor por beneficiario de la transición, no habría lugar al reconocimiento de los incrementos pensionales.

Respecto del tema procesal, también se duele que el A quo no haya decretado oficiosamente una prueba con destino al empleador COLTEJER S.A., para comprobar el tiempo servido a dicha empresa, argumento que este colegiado no puede acoger, ya que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria (artículo 54 CPT y SS), se enmarca dentro de la libre formación del convencimiento (artículo 61 CPT y SS), y tiene como fuente su propia conclusión acerca de la necesidad, pertinencia y conducencia de la prueba. Por lo demás, el hecho que la audiencia se haya realizado de manera concentrada, además de no comportar un desconocimiento de las reglas procesales ni vulneración al debido proceso, no derruye la conclusión final a la que llegó el juez, sobre todo si se tiene en cuenta que a las partes se les garantizó con la suficiente antelación (Estados Nro. 156 del 10 de octubre de 2017), el conocimiento del auto del 19 de septiembre de 2017, expedido con más de un año de anterioridad a la realización de la audiencia, en el que se determinó, que la misma se realizaría de forma concentrada, agotando todas las etapas.

Con todo, tal y como se ha referido, la conclusión no hubiere variado al recepcionar la prueba testimonial, ni en el aspecto de la acreditación de tiempos para alcanzar un beneficio de la transición, que se perdió al haber desbordado su extensión sin cumplir la edad mínima exigida por el Decreto 758 de 1990, y,

como consecuencia de no ser sujeto de la égida del Decreto 758 de 1990, tampoco hay derecho a esos incrementos, no solo por no regularse por dicha norma la situación pensional concreta del actor, sino también por la vigente postura respecto a los mismos (Sentencia de la Corte Constitucional SU 140 de 2019), que estableció que los mismos fueron derogados por la Ley 100 de 1993, no subsistiendo siquiera para los beneficiarios de la transición, sino únicamente para quienes alcanzaron el derecho pensional bajo el Decreto 758 de 1990, por derecho propio.

Hasta este punto, debe decirse que se confirmará la sentencia de primera instancia, por hallar ajustadas a la ley y a la jurisprudencia, los argumentos del A quo.

Empero, como se anotó en precedencia, y como lo hizo ver el recurrente en su recurso de alzada, al solicitar una revisión integral de la sentencia de primera instancia, incluso bajo las reglas del sistema general de pensiones, haciendo referencia al retroactivo pensional del actor, esta Sala estima pertinente pronunciarse al respecto, de conformidad al ya referido inciso 2 del artículo 287 del CGP, ya que se evidencia una clara omisión del A quo en resolver la pretensión segunda de la demanda, donde el actor solicitó, que se declare: *“Que la mencionada pensión de vejez debe ser reconocida al actor desde el mismo momento en que cumplió los sesenta (60) años de edad, es decir, desde el 6 de mayo de 2015. Con base a 1000 semanas cotizadas. Con sus respectivas mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año...”*.

El juez de primera instancia no resolvió la pretensión dirigida a que se modificara la fecha de disfrute reconocida por Colpensiones, no obstante haber fijado el litigio, en orden a determinar si había lugar a la reliquidación de la prestación, con el respectivo retroactivo pensional, incluyendo las mesadas adicionales correspondientes.

Siendo en consecuencia pertinente pronunciarse al respecto, esta Sala no accederá a dicha pretensión, ya que, si bien, dada la alta densidad de cotizaciones alcanzada por el actor, cumple con más de 1.000 semanas al 6 de

mayo de 2015, fecha del cumplimiento de los 60 años, e incluso con más de las exigidas por el sistema general de pensiones a dicha fecha, es imposible reconocerle la prestación en los términos solicitados, ya que no es beneficiario del régimen de transición pensional, cumpliendo la edad de 62 años en mayo de 2017, encontrándose correctamente reconocida la prestación a partir del 1º de junio de 2017, ya que incluso el actor tácitamente confiesa haber laborado hasta el 31 de mayo de ese año, cuando solicita que se tenga en cuenta ese último ciclo, que por lo demás, valga referir, que es completamente intrascendente para los efectos que pretende el actor con esta demanda.

Habiéndose pronunciado la Sala sobre este tópico, será del caso **CONFIRMAR íntegramente** la sentencia de primera instancia.

**Costas Procesales:**

En esta instancia, se han causado costas procesales a cargo del señor HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS, y en favor de COLPENSIONES. Agencias en derecho: medio salario mínimo legal mensual vigente para 2020.

Sin más asuntos que resolver, pasa la Sala a proferir la decisión de segunda instancia.

**VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO: CONDENAR** en costas procesales de segunda instancia, al señor **HERIBERTO ANTONIO OBANDO SALINAS**, en favor de **COLPENSIONES**, fijándose como agencias en derecho, la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente, para 2020.

**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**SE ORDENA** la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los magistrados



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado



**LUZ AMPARO GOMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

Certifico:  
Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS Nro. 107 fijado hoy en la  
Secretaria de este Tribunal, a las 8 a.m.

Medellín, 10 de agosto de 2020

---

Secretario